JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C., cuatro de noviembre de dos mil veintidós.

Acción de tutela No. 11001 31 03 025 2022 00497 00.

Resuelve el juzgado la acción de tutela formulada por la señora LEYDI DAYANA PRECIADO ACOSTA, quien actúa en nombre y representación de su hija menor de edad DANNA ISABELLA FONSECA PRECIADO, contra el JUZGADO 1° CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ, ROSANA REBECA VARGAS DE FONSECA y LEYDY JOHANNA FONSECA MEJÍA, con ocasión de la decisión adoptada en auto adiado 20 de mayo de 2022 proferido dentro del proceso de pertenencia que allí cursa bajo el radicado No. 11001 4003 001 2021 00962 00.

1. ANTECEDENTES

1.1. Pretende la accionante el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, dignidad humana, personalidad jurídica e igualdad. En consecuencia, solicita *“DEJAR sin valor y sin efectos jurídico el auto proferido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL, bajo el radicado 11001 4003 001 2021 00962 00, dentro del proceso de pertenencia la cual declaro por notificada la demanda y no contestada la demanda. En consecuencia, ORDENAR al JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL otorgar el término procesal correspondiente para contestar la demanda y hacer valer las pruebas que ha bien tengan”*.

1.2. Como fundamento de sus pretensiones manifestó, en síntesis, que, el señor JOSÉ EFREN FONSECA RODRIGUEZ, padre de su menor hija DANNA ISABELLA y de la señora LEYDY JOHANNA FONSECA MEJÍA, falleció el 4 de junio de 2021, por lo tanto, están llamadas a heredar los bienes dejados por el causante.

Con posterioridad al fallecimiento del señor FONSECA RODRIGUEZ, su señora madre y abuela de la aquí tutelante, la despojó de la posesión que ostentaba sobre el inmueble ubicado en la Calle 48 A Sur No. 88 C- 10 interior 104, Casa 10 del Conjunto Residencial Alameda de San José IV de la ciudad de Bogotá, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50S-40458504. Instauró una demanda

de pertenencia, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 1° Civil Municipal de esta Ciudad bajo el radicado 1101 4003 001 2021 00962 00.

Manifestó que, no se le notificó personalmente la demanda, sino por correo electrónico, el cual no maneja en razón a su actividad como estilista, razón por la que remitió un escrito al juzgado poniéndole de presente dicha situación; sin embargo, por auto del 23 de mayo de 2022, se tiene por notificada a la menor DANNA ISABELLA FONSECA PRECIADO y se dijo que la misma no contestó la demanda, actuación que considera no cumple con los requisitos que demanda el artículo 6 del Decreto 806 de 2020, esto es, la remisión de la demanda y anexos al canal electrónico de la pasiva, hecho que no fue valorado por el juez al momento de proferir el auto respectivo.

Igualmente, sostiene que nunca le llegó el aviso de notificación de que trata el artículo 292 del CGP; además que éste no se acompañó de copia de la demanda y anexos debidamente cotejados y sellados por la empresa de servicio postal conforme lo exige el artículo 291 y 292 del C.G. del P.

Por lo anterior, su apoderado interpuso los recursos de ley sin obtener resultado alguno, razón por la cual considera que el juez accionado debe realizar un control de legalidad a la actuación a fin de corregir las falencias e irregularidad advertidas en la notificación, ya que en el proceso se encuentra involucrado un bien de una menor de edad, siendo ésta un sujeto de especial protección constitucional, por lo que se hace imperioso acudir a la acción de tutela.

1.3. Asumido el conocimiento de la presente causa por parte de este estrado judicial, dispuso oficiar al juzgado conminado para que rindiera un informe detallado sobre las manifestaciones contenidas en el escrito de tutela; así mismo, remitiera copia de toda la documentación que para el caso en concreto correspondiera.

1.3.1. ROSANA REBECA VARGAS DE FONSECA, por conducto de apoderada judicial, manifestó que, las hijas del causante JOSÉ EFREN FONSECA RODRIGUEZ, iniciaron en el mes de agosto de 2021 el proceso de sucesión respectivo, ante el Juzgado 19 de Familia de Bogotá bajo el radicado No. 2021 00430, el cual culminó porque se adelantó la sucesión por vía notarial, asignándose

como única partida el 50% del inmueble ubicado en la Carrera 87 B No. 51 B-75 sur de esta ciudad, distinguido con folio de matrícula inmobiliaria 50 S-40092944.

De otra parte, sostuvo que su representada ha ejercido la posesión sobre el inmueble en cuestión desde el año 2006, razón por la cual impetró demanda de pertenencia por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio; pues en realidad fue ésta quien lo adquirió y lo dejó en manos de su hijo mayor el señor JOSE EFRAIN FONSECA RODRIGUEZ (q.e.p.d), quien se comprometió a que una vez falleciera su progenitora repartiría la herencia entre todos sus hermanos. Hecho del que era concedora la accionante LEYDY DAYANA PRECIADO ACOSTA; no obstante, decidió incluirlo como un activo dentro de la sucesión del señor EFRAIN, por lo que se vio abocada a iniciar el trámite de pertenencia para no perder la propiedad.

Ahora bien, frente a las direcciones de notificación personal de la heredera DANNA ISABELLA FONSECA PRECIADO, esto es, lpreciadoacosta@gmail.com y Cra. 87 B No. 51 B- 75 sur de Bogotá, sostuvo que fueron obtenidas de la demanda de sucesión que presentó su abogado ALEXANDER BELTRAN PRECIADO el 3 de agosto de 2021. Así mismo, que obtuvo confirmación de entrega y apertura del mensaje de datos por parte del destinatario el día 03 de marzo de 2022 conforme lo certificó la empresa de mensajería Pronto Envíos S.A.; así como también se remitió citatorio de notificación personal y aviso judicial.

Con sustento en lo anterior, mediante auto del 20 de mayo de 2022, el juzgado accionado, tuvo por notificada por aviso judicial a la demandada DANNA ISABELLA FONSECA PRECIADO en calidad de heredera determinada del señor JOSE EFRAIN FOSECA, quien dentro del término legal respectivo no contestó la demanda ni propuso excepciones de mérito.

Decisión que fue recurrida por el vocero judicial de la demandada en mención, quien no reconoció que su poderdante recibió tanto la notificación personal como por aviso al citado correo electrónico, no obstante, dicho medio de impugnación no prosperó, pues el juzgado accionado adujo que el recurrente no desconoció que el correo electrónico al que se remitió la notificación no fuese el de la representante legal de la demandada; así mismo se constató la recepción del mensaje de datos.

Refirió que, el juzgado accionado ejerció control de legalidad en la actuación a través de los autos en que ordenó rehacer la notificación y en el que resolvió el recurso de reposición.

Finalmente, alegó que, en el presente asunto no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados por la accionante, pues el trámite de notificación personal de surtió con apego a la norma procesal y Decreto 806 de 2020; igualmente la presente acción de tutela desconoce el principio de subsidiariedad, ya que no puede ser utilizada como mecanismo para revivir oportunidades procesales que fenecieron por negligencia de la misma parte; además no existe un perjuicio irremediable que torne viable la misma como mecanismo transitorio.

1.3.2. EL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ, manifestó que, en efecto, allí cursa el proceso de pertenencia No. 2021- 00962, en contra de DANNA ISABELLA FONSECA PRECIADO, en calidad de heredera determinada del señor JOSÉ EFRAIN FONSECA RODRIGUEZ; igualmente, en el citado proceso se emitió auto del 20 de mayo hogaño, por el cual se tuvo notificada a la aludida demandada en los términos del artículo 292 del C.G. del P., quien dentro del término legal respectivo no contestó la demanda ni propuso excepciones de mérito, decisión contra la cual se presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, siendo resuelto en auto del 15 de julio de 2022, determinando mantener incólume la decisión opugnada y se negó la concesión del recurso subsidiario de apelación al no ser procedente la misma en los términos del artículo 321 del C.G. del P.

En cuanto a los hechos de la tutela, sostuvo que son los mismos argumentos que fueron analizados en el proveído que desató el recurso de reposición.

1.3.3. LEYDY JOHANNA FONSECA MEJÍA, permaneció silente.

2. CONSIDERACIONES

2.1. La acción de tutela es un mecanismo eminentemente excepcional y residual idóneo para la protección de los derechos constitucionales

fundamentales frente a la vulneración o amenaza por la acción u omisión de las autoridades públicas, y en algunos casos de los particulares, siempre que no se disponga de otra vía judicial expedita para ello, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable al tenor de lo preceptuado en los artículos 1º, 5º y 8º del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Respecto de la procedencia de la acción de tutela contra actuaciones y determinaciones judiciales, ha dicho la jurisprudencia constitucional, que debe contrastarse, primeramente, el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia, en cuanto exigen que:

“(i) la cuestión sea de relevancia constitucional, de forma que rotunda e inconfundiblemente, verse sobre los derechos fundamentales de las partes o de terceros interesados en el proceso en el que se dictó la decisión; (ii) se hayan agotado todos los medios de defensa judicial que estén al alcance del actor para oponerse a la decisión judicial que se acusa por vía de tutela; (iii) se cumpla el principio de inmediatez o que la acción se haya interpuesto en un término razonable; (iv) la irregularidad procesal alegada sea decisiva en el proceso, en caso de que esta sea invocada y resulte verdaderamente lesiva de las garantías constitucionales que les asisten a las partes o a los interesados; (v) se identifiquen, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración de derechos fundamentales de modo que la parte accionante precise en forma clara y contundente la acusación sobre la decisión judicial; y que (vi) no se trate de una tutela contra una sentencia que haya definido, a su vez, una acción de tutela”¹.

La satisfacción de todos y cada uno de estos requisitos generales abre al juez constitucional la posibilidad de continuar el análisis y de definir el asunto que se le plantea, en el marco de la garantía del derecho sustancial. Por el contrario, la inobservancia o el incumplimiento de uno solo de ellos, basta para impedirlo y sustraer el debate del conocimiento del juez de tutela. En ese último caso ha de declararse la improcedencia de la acción de tutela, sin que el estudio pueda trascender al fondo del debate promovido por la parte accionante.

También anotó dicho órgano que: *“Una vez establecida la existencia concurrente de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra sentencias, el juez constitucional debe analizar si de los fundamentos expuestos*

¹ Sentencia t-019- de 2021.

por la parte accionante, de los hechos y de las intervenciones de los interesados, se puede concluir que existió alguno de los requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela cuando se formula contra una providencia judicial.

Los requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales coinciden con los defectos en los que la jurisprudencia reconoce que eventualmente puede incurrir una autoridad judicial ordinaria, en desarrollo de sus funciones. En tales casos, el funcionario judicial puede lesionar el derecho al debido proceso de las partes, de los intervinientes y/o de los terceros interesados.

De esta forma, la Corte ha edificado un sistema de posibles defectos en el proceder de los funcionarios judiciales que afectarían los derechos de las partes en un proceso. Tales defectos atribuibles a las decisiones judiciales son: el orgánico (cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia impugnada carece, de forma absoluta, de competencia); el procedimental absoluto (cuando el juez actuó al margen del procedimiento previsto por la ley para adelantar el proceso judicial); el fáctico (cuando la decisión impugnada carece del apoyo probatorio que permita aplicar la norma en que se sustenta la decisión, o cuando se desconocen pruebas trascendentales para el sentido del fallo); el material o sustantivo (cuando la decisión se toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, cuando existe una contradicción evidente y grosera entre los fundamentos normativos y la decisión, cuando se deja de aplicar una norma exigible en caso o cuando se otorga a la norma jurídica un sentido que no tiene); el error inducido (cuando la autoridad judicial fue objeto de engaños por parte de terceros, que la condujeron a adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales); la decisión sin motivación (debido a que el servidor judicial incumplió su obligación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que soportan su determinación); el desconocimiento del precedente (cuando la jurisdicción ha fijado ya determinado tema y el funcionario judicial desconoce la subregla establecida y afecta, así, el derecho fundamental a la igualdad); y la violación directa de la Constitución (cuando se desconoce el principio de supremacía de la Constitución, su carácter vinculante y su fuerza normativa)².

² Sentencia t-019- de 2021.

2.3. En este caso, con la solicitud de amparo se pretende dejar sin valor y efecto el auto adiado 20 de mayo de 2022 proferido por el Juzgado 1° Civil Municipal de Bogotá, en el señalado proceso de pertenencia, y en su lugar, habilitar el término legal para contestar la demanda, por parte de la aquí accionante.

Para sustentar dicho pedimento, la tutelante actuando en representación de la su menor hija DANNA ISABELLA FONSECA PRECIADO, demandada en dicho asunto y heredera determinada de JOSÉ EFRAIN FONSECA RODRIGUEZ (Q.E.P.D), adujo que en el proveído cuestionado se dispuso tenerla por notificada por aviso judicial conforme al artículo 292 del C.G. del P., cuando en realidad la misma no se surtió en debida forma, pues se remitió al correo electrónico lpreciadoacosta@gmail.com, el cual no funciona correctamente. Por lo tanto, no recibió dicha misiva; hecho que le impidió conocer la demanda y contestarla en su oportunidad; sin embargo, según el anexo que le remitió un familiar constató que dicho aviso no viene acompañado del auto admisorio, ni de la demanda debidamente cotejados y sellados por la empresa de mensajería, situación que no fue advertida por el Juez accionado, por lo que éste debe ejercer un control de legalidad en la actuación, más aún, cuando se encuentran involucrados los derechos de una menor de edad.

Desde la anterior perspectiva, debe destacarse el derecho que todos los usuarios de la justicia tienen al debido proceso en el entorno de un proceso jurisdiccional, siendo pertinente reiterar que tratándose de tutela contra providencia judicial, la Corte Constitucional en diversa jurisprudencia³ ha precisado, que ésta no constituye otra instancia que permita controvertir las decisiones del juez natural, toda vez que su carácter, se insiste, es residual y subsidiario, lo que impide que se ejerza como recurso alterno o suplementario de los disciplinados por el ordenamiento para invocar la protección de las garantías *iusfundamentales* que se estimen vulneradas al interior del proceso, salvo que se den los supuestos generales y específicos de procedencia señalados anteriormente.

Así pues, revisada la actuación, se advierte que, en el presente asunto, no convergen los requisitos advertidos, por las siguientes razones:

³Corte. Const. Sent. T-086 de 2007, T-502 de 2008 entre otras.

En primer lugar, porque la accionante no agotó debidamente los mecanismos ordinarios de defensa judicial que estaban a su disposición, toda vez que la inconformidad que origina la presente actuación estriba en la indebida notificación de la demandada DANNA ISABELLA FONSECA PRECIADO, para lo cual contaba con la figura jurídica de la nulidad, que contempla como hipótesis nulitiva dicha causal (No. 8 art. 133 CGP), por cuyo cause tenía ante sí, la posibilidad del ejercicio de un debate probatorio; instrumento procesal, que en el evento de ser rechazado o negado, era pasible del recurso vertical de apelación a voces del numeral 6 del artículo 321 del CGP. sin embargo, decidió renunciar al ejercicio de esta herramienta procesal, para hacer uso de un mecanismo distinto, como fue la interposición de los recursos ordinarios, que, si bien constituyen medios alternos de defensa, frente a la decisión cuestionada no era admisible la apelación como en efecto, lo determinó el juzgado de instancia.

En segundo lugar, y al margen de lo anterior, pasando al campo de la verificación del ejercicio del derecho, a través de las condiciones específicas de procedibilidad de la tutela (defectos fáctico y sustantivo), la decisión cuestionada no luce arbitraria ni contraria a derecho, ciertamente porque el juzgado accionado resolvió mantener incólume la decisión tras considerar que “ (...) *no se comparten los argumentos dados por el extremo recurrente pues primordialmente no se desconoce que el correo electrónico al que se remitió la notificación no fuera el de la representante legal de la demandada, igualmente se basa en la no recepción de la diligencia de notificación conforme al artículo 292 del C.G. del P., sin embargo se deja de lado que en el presente asunto si existe certificado de la empresa postal que acredita la recepción conforme al Decreto 806 de 2020 hoy Ley 2213 de 2022, el cual no tiene manifestación alguna por parte del apoderado judicial, en donde se puede verificar que en el correo electrónico si llevaba los adjuntos contentivos de la demanda, anexos y auto admisorio*”. Tal determinación se apoyó en los elementos de prueba militantes en el expediente del proceso verbal.

De otra parte, llama la atención de este juzgador que la accionante adujera que el correo electrónico al cual se le remitió la notificación por aviso judicial, esto es, lpreciadoacosta@gmail.com no esté funcionando correctamente, por lo que no recibió la aludida comunicación; sin embargo, en la actualidad continúa utilizándolo para actuaciones judiciales e identificándolo como un medio de notificación personal, pues el poder que confirió al abogado ALEXANDER BELTRAN PRECIADO dentro del proceso en cita, proviene de dicha dirección

electrónica (Archivo No. 043); igualmente, en la presente acción de tutela consignó la citada dirección para efectos de notificación personal, hecho que permite colegir que el aludido correo electrónico corresponde al efectivamente utilizado por la accionante.

Precisado lo anterior y al existir un medio de prueba conducente, como lo es la certificación expedida por una empresa de mensajería en la que certifica además de la entrega, la apertura del mensaje de datos por parte del destinatario, son estos elementos de juicio suficientes para que el funcionario judicial accionado confirme la notificación de dicho extremo procesal en los términos del artículo 292 del C.G del P.; Igualmente, allí se consignó que se anexaba copia de la demanda y del auto, afirmación que de modo alguno fue desvirtuada por la afectada.

En consecuencia, es evidente que la autoridad judicial accionada estuvo lejos de configurar una violación constitucional, dado que su decisión fue producto de una interpretación jurídica respetable, con apego a las normas procesales que rigen el tema y con sustento en el acervo probatorio allegado al plenario, sin que se avizore una actuación irregular por parte de dicho juzgador.

Memórese que este escenario no es una suerte de tercera instancia para reexaminar los planteamientos expuestos ante el funcionario de conocimiento, u obtener una decisión en otro sentido al estar en desacuerdo con el examen probatorio y su interpretación *“mucho menos cuando la adoptada es propia de la labor constitucional y legal de administrar justicia, regida por los principios de autonomía e independencia judicial reconocidos en el ordenamiento superior”*⁴.

3. CONCLUSIÓN

Acorde a lo anterior, no luce arbitraria, caprichosa o antojadiza la decisión adoptada por el juzgado accionado, por lo tanto, no se configura una vía de hecho en virtud de la cual, se pudiera vulnerar los derechos fundamentales reclamados por la accionante, por lo que se negarán las súplicas de la tutela.

4. DECISIÓN DE PRIMER GRADO.

⁴ Sentencia de 31 de mayo de 2012, exp. 11001-02-03-000-2012-01039-00.

Con fundamento y apoyo en lo dicho, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

4.1. Negar el amparo solicitado por la señora LEYDI DAYANA PRECIADO ACOSTA, en representación de la menor de edad DANNA ISABELLA FONSECA PRECIADO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

4.2. Notificar este fallo conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4.3. Remitir a la H. Corte Constitucional el presente fallo, para su eventual revisión, de no ser impugnado.

Cúmplase

El juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

L.S.S.

Firmado Por:
Luis Augusto Dueñas Barreto
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 025
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5124f3d30b80d86459729f65157f0ecc2dd5f552d126b424bc21f6c8613fe8f7**
Documento generado en 04/11/2022 10:46:24 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>